

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

El mes de junio, crucial para Grecia y sus relaciones con los acreedores, ha terminado, sin embargo, con todo por resolver y con la decisión de delegar a un referéndum popular (el domingo 5 de julio) la decisión sobre aceptar o no las condiciones de rescate propuestas por la UE. En *Anexo Documental* se reproduce la traducción del discurso pronunciado por Tsipras antes del referéndum.

Cabe señalar que, pese a las dificultades en las negociaciones con los socios y el desgaste que han supuesto cinco meses de incertidumbre, el Gobierno griego ha seguido contando con un amplio apoyo de la sociedad, dividida, en cambio, entre los que no temen una salida del euro y los que apuestan por continuar en la moneda común. Las encuestas a primeros de mes daban al partido gubernamental de Syriza prácticamente el mismo respaldo que en las elecciones de enero, un 33% frente al 36,34 % obtenido en las urnas, veinte puntos por delante de los conservadores de Nueva Democracia, que han sufrido una caída en picado respecto al 27,81 % obtenido en los comicios. Estas cifras corresponden al sondeo realizado por la Universidad de Macedonia entre el 15 y el 16 de junio. El 52 % de los griegos evalúa positivamente el papel del Gobierno en las negociaciones, mientras el 30 % lo desaprueba.

Otra encuesta elaborada por el Instituto demoscópico GPO del 12 al 15 de junio, reflejaba que dos tercios de la población griega cree que finalmente habrá un acuerdo con los acreedores, pero que el Gobierno de Alexis Tsipras tendrá que ceder en sus posiciones para conseguirlo. El sondeo de GPO recoge que un 56,2 % apoya un mal acuerdo que implique la permanencia en el euro aunque sea a costa de nuevas medidas de austeridad, mientras un 35,4 % preferiría la salida del euro.

Durante las negociaciones a mediados de mes, el Eurogrupo no logró llegar a un acuerdo con Grecia y decidió dejar las negociaciones en manos de los líderes de la eurozona, en una cumbre extraordinaria que ha supuesto el último intento para evitar una “catástrofe” para la que los países están ya haciendo planes de contingencia. Se recuerda que el 30 de junio expiraba la segunda prolongación del rescate griego y Atenas debe hacer frente a finales de mes a un pago de 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando sus arcas están vacías y además los bancos griegos han sufrido salidas de depósitos por unos 3.000 millones de euros en lo que va de semana.

Los principales líderes de la Unión Europea (UE) apuntaban al sábado 27, día de la celebración del quinto Eurogrupo extraordinario dedicado a Grecia en diez días, como la fecha clave para que se logre finalmente un acuerdo, apenas tres días antes de que expirara la prórroga del rescate al país.

Mientras en Bruselas continuaban las negociaciones a todos los niveles para esclarecer el futuro de Grecia, en Atenas se palpaba el nerviosismo ante la ausencia de un acuerdo. El Gobierno ha seguido defendiendo la última propuesta presentada “como base de los

debates” en las negociaciones por las instituciones, habiendo rechazado el último documento porque incluía medidas que considera inaceptables en materias como el mercado laboral, las pensiones o la petición de elevar el IVA de los restaurantes, caterings y hoteles hasta el 23 % a partir del 1 de julio. Pese a las dificultades en las negociaciones de las últimas horas, tanto el primer ministro, Alexis Tsipras, como el todavía titular de Finanzas, Yanis Varoufakis, se mostraron convencidos de que finalmente su país podría llegar a un acuerdo con los socios.

A finales de junio pues, el Gobierno de Alexis Tsipras aún no había firmado el pacto con los acreedores pero ha tenido que justificar las concesiones ante las filas de Syriza, reticentes a aceptar las exigencias de las instituciones. El portavoz del Gobierno griego, Gavriil Sakelaridis, ha reconocido que las propuestas entregadas a los socios se alejan del programa inicial del partido. Aun así, ha recalcado que siguen defendiendo un reparto justo de la carga social. El plan presentado por Grecia a los socios contiene concesiones que van claramente más allá de lo ofrecido hasta ahora y entre las medidas más duras figuran subidas del IVA para los hoteles, de la carga fiscal de las empresas y de las cotizaciones a la Seguridad Social. De los 7.900 millones de euros de ingresos adicionales que arrojen estas medidas este año y el próximo, la mayor parte, 7.300 millones, corresponden a subidas de impuestos o de contribuciones a la Seguridad Social. Si finalmente se firma el acuerdo, la propuesta griega prevé un aumento del IVA del 6,5 % al 13 % para los hoteles y una bajada de medio punto porcentual, del 6,5 % al 6 %, para los medicamentos, libros y teatro. Entre las bajadas figura la del impuesto de solidaridad -un gravamen extraordinario introducido en el fragor de la crisis en 2010 y en principio solo por un año-, pero únicamente para los ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales.

Tsipras ha optado por evitar males que desde un principio su equipo consideró mayores, como hubiera sido la ruptura con los socios, el riesgo de quiebra y la eventual salida del euro. Uno de los escenarios que más se plantearon para el caso de que no haya un apoyo cerrado de los partidos del Gobierno fue el de la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que Tsipras había descartado en las últimas semanas.

Ya desde primeros de mes los acreedores dieron a conocer que consideraban “insuficiente” la propuesta recibida por parte del Gobierno griego para tratar de forjar un compromiso que conduzca a un acuerdo sobre los ajustes que debe aplicar Atenas, aunque sigue habiendo esperanzas para un acuerdo en los próximos días. Tsipras había rechazado el pasado miércoles la oferta los acreedores, por lo que se esperaba desde el pasado jueves una nueva propuesta alternativa.

Según los datos del OCSE, la economía griega quedará casi inmóvil en 2015, registrando una variación del 0,1%, aunque se encuentre un acuerdo entre Grecia y los acreedores. La inseguridad causada por el programa de reformas y las obligaciones de Grecia hacia los acreedores han detenido cualquier tipo de inversión en la economía.

Los economistas del OCSE prevén también un índice medio de desempleo de 25,7% en 2015, y otro año de deflación, con una previsión que vuelva a registrarse una leve inflación del 0,3% en 2016.

Otros datos previsible según el OCSE son: el déficit al 3,4% del PIB en 2015 y al 2.8% en 2016 (3,6% en 2014), y la deuda pública al 180% del PIB en 2015 frente al 177,4% de 2014 y al 178,1% de 2016.

El Gobierno griego debía encontrar más de 1.000 millones de euros para aumentar las pensiones, después de que el Tribunal Supremo Administrativo declarara ayer anticonstitucional los recortes aplicados en 2012 por imposición de la troika, lo que supone un golpe adicional a las negociaciones con los acreedores. La sentencia obliga al Gobierno a restaurar las pensiones -las regulares y las suplementarias- a los niveles previos a 2012, cuando se aprobaron los recortes, pero le exime de pagos retroactivos. La decisión alude a una ley aprobada en noviembre de 2012, que aplicó recortes escalonados a todas las pensiones del sector privado superiores a los 1.000 euros. Los recortes eran de un 5 % para las pensiones de hasta 1.500 euros mensuales, del 10 % para la franja entre 1.500 y 2.000 euros, y del 15 % para las superiores a los 2.000 euros. El fallo permite que unos 800.000 pensionistas puedan recibir a partir de ahora los aumentos correspondientes, pero no tiene efecto retroactivo, con excepción de los 2.000 pensionistas que habían presentado la demanda que sí tienen derecho a recibir los atrasos.